

Tradiciones políticas de América Latina

La experiencia colonial ha sido y sigue siendo todavía el factor singular más importante de la tradición política de América Latina. Con la consolidación de los imperios coloniales español y portugués entre 1500 y 1650, se logró en dicha área un grado de unidad desconocido en cualquier otra parte del mundo, reforzado por el proselitismo de la Iglesia Católica y (aparte de Brasil y Haití) la extensión del castellano. Las colonias fueron consideradas como reinos en igualdad de condiciones, que debían prestar obediencia directa a un único señor, el Rey de España. Este las administraba directamente a través del Consejo de Indias, en Sevilla, y de funcionarios nacidos en la Península, limitados en sus poderes por un elaborado código de leyes y prácticas, y sometidos a la institución de la «residencia» —una evaluación final de su administración— como control de sus actividades mientras permanecieran en el cargo.

Las tradiciones de esta estructura administrativa se vieron reforzadas por su larga duración. La repentina desaparición de la autoridad real española, a causa de la abdicación forzosa de Carlos IV en Bayona (1808), eliminó la piedra fundamental sobre la que descansaba todo este edificio. Pero el imperio tardó en desmoronarse, ya que los conservadores intentaron mantener su posición y privilegios, profesando lealtad a su sucesor, que sería Fernando VII. Desconfiaban sobre todo del nuevo movimiento nacionalista de los «liberales» en España, que, con su nueva concepción de la unidad del estado extraída de los autores de la Ilustración y la experiencia de la Revolución Francesa, ofrecían a las colonias un estatus inferior en cierto sentido al que habían estado hasta entonces acostumbradas.

Además, la idea de liberalismo se asociaba con las de anticlericalismo y republicanism. A comienzos de la década comprendida entre 1820 y 1830 muchos conservadores se mostraron dispuestos a aceptar una república como alternativa a las interferencias liberales de España, pero combatieron duramente y durante largo tiempo cualquier intento por disminuir los derechos tradicionales de la Iglesia. Una vez que se alcanzó la independencia, las luchas entre conservadores y liberales se convirtieron en el rasgo dominante de la vida política de todos los países de habla española, e incluso en Brasil, donde el mantenimiento de la monarquía hasta 1889 impidió su disolución. Los liberales llegaron a identificarse con la causa de la autonomía provincial, y los conservadores con el objetivo de un Estado fuerte bajo un control militar-burocrático centralizado. En lo

que había sido la América española, se universalizaron los regímenes republicanos por la falta de posibles candidatos monárquicos, y la mística napoleónica contribuyó a apoyar la transformación del generalato en la principal cualificación para detentar el poder político. De ahí que los primeros cincuenta años de independencia se asocien sobre todo con la institucionalización de la figura del «caudillo» militar.

El llamado «caudillismo», es decir, el dominio de la política por el caudillo, constituyó por tanto la respuesta de los criollos a la crisis de la descolonización. Al tratarse de un régimen en esencia personalista, su impacto dependía sobre todo de la personalidad de quienes ejercieran el cargo. A Simón Bolívar (1783-1830), liberador de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, se le pidió que dictase una constitución para Bolivia, país llamado así en su honor; recurriendo al invento del Areopagus o consejo de censores, intentó reinstalar ese poder moral de supervisión que se había visto inadvertidamente eliminado junto con la monarquía. Su dilema consistía en que no estaba dispuesto a utilizar la fuerza para obligar a su pueblo a ser libre. El doctor José Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), de Paraguay, fiel seguidor del pragmatismo de Benjamín Franklin, cerró su país al mundo exterior para conservar su sociedad paternalista y rousseauiana. Pero esa solución resultaba difícilmente aplicable a los estados costeros de América del Sur, y mucho menos a los de América Central, donde José Cecilio del Valle (1776-1834) murió mientras se estaban contando todavía los votos por los que se le había elegido presidente, mientras que sus planes para el pueblo, discutidos en una famosa correspondencia con Jeremy Bentham, seguían todavía sin aplicarse. La creencia de Bentham en «el mayor bien para el mayor número de personas» y sus teorías sobre el Derecho ejercieron una considerable influencia en los códigos legales de América Latina, incluso en los Estados más dictatoriales, y la prisión de Caracas se llama todavía el Panóptico, nombre derivado de su «panopticon».

No obstante, la mayoría de los caudillos eran militares que apenas tenían tiempo para pensar en política, y debían su poder a su constante vigilancia, como en el caso del líder de la Confederación Argentina, Juan Manuel de Rosas (1793-1877). Rosas fue el blanco real de los ataques de la obra de Domingo Faustino Sarmiento, *Facundo* (1845), aparentemente la sátira de un pequeño caudillo del interior. Un contemporáneo de Sarmiento, Juan Bautista Alberdi (1810-84), argumentó en 1852 que los auténticos fines del gobierno eran los de poblar el territorio nacional. Sarmiento (1811-88) deseaba que se educara a la población. Paradójicamente,

Rosas, que se oponía a la unificación formal, fue por reacción el creador de la Argentina unida de la que Sarmiento sería presidente (1868-74), bajo la Constitución de 1853, fuertemente influida por la de Estados Unidos.

Argentina fue prácticamente el único país que alcanzó un régimen constitucional tan tarde; en el resto se siguió el modelo del constitucionalismo parcial, según el cual se reescribían, dejaban en suspenso o simplemente se ignoraban las constituciones de acuerdo con las conveniencias del grupo que detentaba el poder en cada momento. Se redactaron nuevas constituciones para legitimar tomas del poder a la fuerza, o incluso la prolongación de un mandato presidencial sin el recurso a las elecciones.

Venezuela, el primer estado latinoamericano que redactó una constitución (1811), ha conocido desde entonces más de veinte. Durante todo el siglo XX se dio por sentado que éste era un fenómeno transitorio que desaparecería con la «madurez». Hasta cierto punto, la aplicación de la «República Conservadora» en Chile con la Constitución de 1833 y su pacífica vida política durante más de cincuenta años, parecieron confirmar esta idea. A partir de 1870 los «civiles» de Perú comenzaron a darse cuenta de que los golpes de Estado y las dictaduras latinoamericanas estaban estrechamente relacionados con el fenómeno básico del militarismo. Al tiempo que mantenían las medidas constitucionales destinadas a poner freno a las ambiciones militares, que tan inútiles habían demostrado ser en el pasado, abrieron nuevos caminos con la creación de una academia militar destinada a profesionalizar y de este modo «domesticar» a los militares. Consiguieron sólo un éxito parcial. Tal como demostraría el paso del tiempo, los cuerpos militares profesionalizados tenían todavía mayor capacidad para apoderarse del poder político, aunque no para utilizarlo.

En 1857, el año de la «Reforma» en México, en el que se confiscaron las tierras de la Iglesia y se acabó con sus privilegios, estaba disminuyendo ya el primer ímpetu del liberalismo. Muy pronto se vería reforzado por la doctrina del positivismo, concebida en Francia por Auguste Comte, e introducida en la educación mexicana por Justo Sierra (1848-1912). Despojados de sus orígenes místicos y reforzados por el darwinismo social de Herbert Spencer, el positivismo, con sus teorías de las tres fases o etapas del desarrollo humano y su creencia en la posibilidad de una comprensión científica de la sociedad, representaba una sólida justificación del dominio de una élite sobre el resto de la población. Por ello se convirtió en la doctrina oficial del México del Porfiriato (1876-1911). Bajo la influencia de Benjamin Constant, Botelho de Magalhães (1830-91) consiguió también el favor de los líderes militares que crearon

en 1889 la República de Brasil e introdujeron el eslogan de Comte «orden y progreso» en la bandera nacional. En su novela sobre el «Mar interior», *Os Serões* (1902), Euclides da Cunha (1866-1909) contribuyó a reforzar las ideas de vigor innato e inevitabilidad de una lucha triunfal. En Argentina, Agustín Alvarez (1857-1914) argumentó todavía más explícitamente que los ejemplos de Brasil y Chile demostraban que la estabilidad dependía de formas políticas del pasado, y más concretamente del despotismo. En Colombia se creó ya en 1862 una cátedra de Sociología en la Universidad de Bogotá; allí, tras una breve fase radical, el seguidor de Spencer, Rafael Núñez (1823-94), se convirtió en conservador partidario de la idea de evolución. Y en Venezuela, después de que la dictadura de Antonio Guz-

Congreso chileno bajo el mandato de Unidad Popular. El fresco de la pared muestra un parlamento decimonónico.



mán Blanco (1829-99) hubiese dado paso a la de sus sucesores menos ilustrados, Laureano Vallenilla Lanz (1870-1936) escribió su obra *Cesarismo Democrático* (1919), que no sólo contribuyó a legitimar esa forma de gobierno, sino que la defendía con tanta habilidad que el propio Mussolini se mostró entusiasmado con el libro.

El año antes, 1918, el «Movimiento de reforma universitaria» que comenzó en Córdoba, Argentina, contribuyó a dar nuevo ímpetu a la lucha contra el despotismo en todo el continente. En su forma saint-simoniana, el socialismo había sido profesado por Alberdi; pero hubo que esperar a los últimos años del siglo XIX para que los autores socialistas fuesen bien acogidos en América Latina. Los movimientos obreros carecían de base sobre la que desarrollarse, sobre todo antes de la construcción de las grandes vías férreas, de la aparición de fábricas de conservas de carne y de empresas mineras en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y México. Con anterioridad a 1914 la ideología de organización de los trabajadores más importante fue el anarquismo, también traído de Europa. Los intentos de sindicalismo organizado se tenían que enfrentar con frecuencia a intervenciones armadas, como la que tuvo lugar en 1906 en Cananea, México, o en 1907 con motivo de la huelga de Iquique, en Chile. En México, donde la reafirmación de los derechos democráticos por parte de Francisco I. Madero (1877-1913) dio lugar al estallido de la revolución (1910), se permitió en 1913 la fundación de la Casa del Obrero Mundial, y los trabajadores, agrupados por Alvaro Obregón (1880-1928) en los llamados «Batallones Rojos», encontraron sus propios portavoces y lograron el reconocimiento de los derechos de los asalariados en la Constitución de 1917. Como Secretario de Educación de Obregón, José Vasconcelos (1871-1959) organizó el primer intento latinoamericano para erradicar el analfabetismo y dotó de un nuevo significado social a la idea del patronato de las artes por parte del Estado. Bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas (1895-1970) se consolidó la revolución mediante la asimilación de las organizaciones obreras por parte del Partido Revolucionario Nacional (PRN), de tendencias socialistas, y durante la década de los veinte se produjeron grandes repartos de tierras, destinados a acallar las demandas campesinas de devolución de tierras, asociadas con el liderazgo del dirigente guerrillero Emiliano Zapata (1879-1919).

El «indigenismo», la revaluación de la aportación india a la vida latinoamericana como opuesta a la hispánica, había ejercido ya un gran impacto cultural en México y Perú a finales del siglo XIX. Se trataba en parte de una respuesta a los dogmas dominantes del «racismo científico», que menospreciaba a los no-blancos. En México, el joven or-

ganizador estudiantil peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979), fuertemente influido por los valores indigenistas reflejados en la obra de Vasconcelos *La raza cósmica* (1925), intentó unificar el continente basándose en un programa de valores indios mediante la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA). El APRA, implantado en Perú a partir de 1930, dominó la política peruana durante toda una generación, aunque el ejército le negó constantemente el derecho a ejercer el poder. El marxista José Carlos Mariátegui (1895-1930), autor de una obra ampliamente leída, *Siete ensayos de la realidad peruana*, fundó en 1928 el primer Partido Socialista de Perú. Los puntos de vista que expresó sobre la necesidad de un cambio fundamental, que en su influencia indigenista se alejaban notablemente de la tradición marxista, fueron redescubiertos en la década de los sesenta y se materializaron en la revolución propiciada por los militares en 1968 bajo el general Juan Velasco Alvarado; éste nacionalizó las industrias pesadas y expropió las grandes haciendas.

En la vecina Bolivia, la catástrofe de la Guerra del Chaco había empujado ya anteriormente a esa revaluación, y Bolivia había nacionalizado su petróleo (1937) antes de que la revolución de 1952 redistribuyera las tierras y nacionalizase las minas de estaño. La proclamación en los años setenta del Quechua como idioma oficial, representó un paso simbólico de gran importancia en términos prácticos para los millones de indígenas que anteriormente se habían visto marginados de la vida política nacional.

En los restantes países, el factor que más contribuyó al desarrollo de las ideas izquierdistas durante ese período fue el impacto de la Gran Depresión. Tras un período de desórdenes (incluyendo la efímera «República Socialista» de 1931, bajo el coronel Marmaduke Grove y Carlos Dávila), Chile adoptó un gobierno de «Frente Popular» en la misma línea que los europeos. Pero la consecuencia habitual de todo ello, al igual que en Argentina, fue la toma del poder por parte de los militares y una serie de gobernantes «apolíticos», que solían dejar las libertades civiles en suspenso por temor a la influencia izquierdista. En El Salvador, Alberto Masferrer (1868-1932) había llegado a hablar de una «vía pacífica al socialismo»; pero cuando, en 1932, se produjo un levantamiento de campesinos, mandó fusilar a miles de ellos. Entre 1943 y 1945, la influencia de la Carta Atlántica y la propaganda de los Aliados durante la guerra contribuirían a derrocar a gobiernos militares en toda América Latina; pero, en el nuevo clima de «Guerra Fría», se consideró sospechoso incluso «el socialismo espiritual» del guatemalteco Juan José Arévalo (presidente de 1945 a 1951). Su sucesor, Jacobo Arbenz, se vio derrocado

en 1954 cuando intentaba llevar a cabo una reforma agraria que no mereció la aprobación del gobierno de Estados Unidos.

Ya a comienzos de siglo, el «anti-yanquismo», u hostilidad a los valores supuestamente «materialistas» representados por Estados Unidos, se había visto frecuentemente expresado por el uruguayo José Enrique Rodó (1872-1917). En su obra *Ariel*, Rodó, de ideas positivistas, reafirmaba el idealismo que consideraba que Estados Unidos había perdido, y que creía que América Latina estaba destinada a preservar. Según fue creciendo el poder de Estados Unidos, algunos, como Vasconcelos, buscaron refugio en el hispanismo tradicional. Alcides Arguedas (1870-1946) razonó pesimistamente que los bolivianos eran un «pueblo enfermo», incapaz de progresar o desarrollarse. No obstante, y mientras lo hacía, instructores militares alemanes estaban implantando ya las ideas del fascismo en su país; la Guerra del Chaco fue en parte el resultado de la creencia por parte de los militares de que tenían una misión que cumplir. Chile mostró reticencias hacia la causa de los Aliados durante la II Guerra Mundial, y en Argentina, que permaneció bastante aislada hasta 1945, Juan Domingo Perón (1895-1974) utilizaría a partir de 1945 la herencia del fascismo al servicio de un nuevo nacionalismo populista de carácter marcadamente anti-norteamericano.

Por otro lado, un joven argentino, Ernesto «Che» Guevara (1928-67), que había visitado Bolivia tras la revolución de 1952 y Guatemala en 1954, experimentó como consecuencia de ello un proceso de radicalización, uniéndose a un grupo de exiliados cubanos encabezados por Fidel Castro Ruz (nacido en 1926) y tomando parte en una expedición destinada a derrocar al dictador de Cuba, presidente Fulgencio Batista. El dominio que Estados Unidos había ejercido tradicionalmente sobre Cuba desde el momento de la independencia, hizo que su movimiento se orientase cada vez más en contra de Estados Unidos. La Revolución Cubana de 1959 dio en 1961 un giro marxista-leninista, ya que se produjo lo suficientemente tarde como para, por primera vez en cuarenta años, poder pedir ayuda a una potencia no americana, la Unión Soviética.

De ese modo, la Revolución Cubana, que en un principio buscó su fuente de inspiración en la tradición independentista y liberal del poeta y revolucionario José Martí (1835-95), modificó los supuestos políticos tradicionales de América Latina. Pero su fórmula para hacerse con el poder político, expuesta por el propio Guevara en su libro *La Guerra de Guerrillas* (1961), demostró no ser aplicable en la mayoría de los países del continente. El propio Guevara murió en Bolivia en 1967 en el transcurso de un fallido in-



Che Guevara, idealista, guerrillero y ministro cubano que inició el movimiento guerrillero en Bolivia.

tento «de convertir los Andes en la Sierra Maestra de América del Sur». Y, lo que fue peor todavía, el miedo al comunismo desencadenó una nueva oleada de golpes de Estado reaccionarios.

Cuando la izquierda recurrió como alternativa al terrorismo urbano, practicado por el grupo de Carlos Marighe-la en Brasil y por los Tupamaros en Uruguay, los líderes militares siguieron el ejemplo de los brasileños en 1964, y decidieron atrincherarse en el poder durante el tiempo que fuera necesario para acabar con el descontento y consolidar una contrarrevolución conservadora. Durante una década pareció como si en este proceso fuesen a desaparecer incluso los avances del liberalismo decimonónico. En Chile, el presidente Salvador Allende, socialista de formación marxista y libremente elegido en 1970, se vio derrocado en 1973 por las fuerzas armadas, que se negaron a restaurar la democracia y desencadenaron una represión masiva. En Argentina, un nuevo golpe (el sexto desde 1930) instaló un

régimen militar en 1976. Uruguay sucumbió también a una intervención militar apoyada desde Brasil. En todos estos países, los militares justificaron sus intervenciones invocando la «seguridad nacional», doctrina inspirada en gran medida por el pensamiento estratégico norteamericano, pero que los oficiales del ejército latinoamericano aplicaron a la política interna. En 1979, la vuelta de los países andinos a la democracia se vio seguida por la revolución socialista indígena encabezada por los Sandinistas en Nicaragua, y por la celebración de elecciones libres en Argentina en 1983, pareciendo como si por fin América Latina fuese a ser capaz de encontrar un camino intermedio entre el militarismo y la revolución.

El enorme entusiasmo suscitado por las visitas papales de Pablo VI y Juan Pablo II ha demostrado que el Catolicismo implantado por españoles y portugueses ha arraigado firmemente en América Latina. Esto ha permitido a los partidos Demócrata Cristianos sobrevivir a pesar de las fuertes presiones ejercidas desde ambos extremos. La democracia sigue siendo un ideal vigoroso, sobre todo en Costa Rica y Venezuela. En la década de los setenta, y bajo la influencia del Concilio Vaticano II, líderes eclesiásticos de todo el continente han asumido el papel de críticos honestos del autoritarismo: en Chile a partir de 1973, en Brasil a partir de 1964, y (hasta cierto punto) en Argentina a partir de 1976, exigiendo en algunos casos con éxito, la restauración de derechos humanos elementales. Los pensadores latinoamericanos han contribuido también mucho a la lucha por un derecho y unas organizaciones internacionales efectivos. Aunque la historia de la tradición política latinoamericana muestra tantos y tantos ejemplos de adopción de posturas políticas extremas (a lo que ha contribuido la frustración generada por las intervenciones militares), el espíritu democrático de independencia contra toda clase de intervención exterior ha demostrado una gran resistencia en el pasado, y cabe esperar que siga haciéndolo en el futuro.

PARC

Caudillismo, coronelismo, caciquismo

«Caudillo», «caudillismo», «coronel», «coronelismo», «cacique», «caciquismo» han sido términos constantemente utilizados en los análisis acerca de la política latinoamericana. Pero, ¿qué significan?

El término «cacique» procede de la palabra con la que en el idioma taino-arawak se designaba al jefe, y que Colón conoció en su primer viaje del descubrimiento, cuando

llegó a La Española. En todo el mundo hispánico se utiliza también para referirse a los que ejercen de manera abusiva el dominio local. El equivalente brasileño es «coronel», palabra derivada del rango militar de que solían gozar los hombres que en el siglo XIX detentaban el poder local en Brasil. Aunque no siempre, la palabra «cacique» se utiliza normalmente en sentido peyorativo, para referirse a alguien que pervierte las instituciones públicas para fines privados, abusa de su poder y patronazgo para favorecer excesiva o exclusivamente su propia clientela, manipula los puestos públicos, se interfiere con la justicia y la policía, controla las elecciones mediante el fraude, etcétera.

En la literatura costumbrista del siglo XIX aparecen numerosas descripciones de caciques, la mayoría de las cuales reflejan una actitud urbana de superioridad hacia los temas rurales, y numerosas obras de autores españoles han denunciado esta lacra a finales del siglo XIX y comienzos del XX. La más conocida de todas es probablemente *Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España: urgencia y modelo de cambiarla* (Madrid, 1902), de Joaquín Costa. Las descripciones detalladas del «caciquismo» latinoamericano comienzan con la obra de Víctor Nuñez Leal, *Coronelismo, enxada e voto* (Río de Janeiro, 1948). Se trata de un espléndido estudio histórico-legal, que sigue teniendo una importancia fundamental. Nuñez Leal consideraba el «coronelismo» como el resultado «de la superposición de formas estructurales, evolucionadas a través del proceso representativo, sobre una estructura social y económica inadecuada», y exploró minuciosamente las connivencias entre el poder del Estado y el local, la influencia de la escasez fiscal, la organización de la policía y del poder judicial y el papel de las elecciones en el sistema. Posteriores estudios de historiadores y antropólogos de otras regiones de América Latina y el mundo mediterráneo, así como de Brasil, han seguido explorando las variedades y evolución del «caciquismo». Estas investigaciones han abandonado el tono de denuncia adoptado por Joaquín Costa, y han mostrado la racionalidad básica de buena parte de lo que ocurre con el caciquismo.

El poder del cacique local o coronel tiene diversos orígenes, y varía mucho de una región a otra. Conviene señalar que frecuentemente es falso dar por sentado que el poder local es ejercido por los terratenientes, o bien directamente o bien a través de personas interpuestas, así como que el caciquismo se apoya exclusiva o predominantemente en la fuerza y el fraude. En ningún sitio se ha conseguido reducir o acabar rápidamente con el poder de los caciques mediante presiones del gobierno central o el desarrollo de partidos políticos modernos.

En Argentina, el término «caciques» se utiliza normalmente para referirse sólo a los jefes de los grupos indígenas sobrevivientes, mientras que a la figura local dominante que controla los votos se la denomina «caudillo». También en otras regiones de América Latina el término «cacique» sigue utilizándose (sin connotaciones peyorativas) para referirse a la figura del jefe indígena.

La palabra «caudillo» significa simplemente jefe o líder. No obstante, algunos historiadores han intentado dotar a este término de unas connotaciones más específicamente hispanoamericanas, aplicándolo concretamente a los dirigentes de las décadas inmediatamente posteriores a la independencia. Según el estudioso norteamericano Robert L. Gilmore, «el caudillismo puede definirse como la unión del personalismo y la violencia para la conquista del poder». Es un medio de selección e implantación del liderazgo político en ausencia de una estructura social y de unos agrupamientos políticos adecuados para el funcionamiento del gobierno representativo. La práctica y la técnica del caudillismo, desarrolladas durante las guerras de independencia, se basaron en las de las oligarquías coloniales, pero modificadas por los efectos regresivos de un conflicto civil irregular. Al «caudillo típico» se le identifica con la figura de un dictador, que basa su poder en el control personal de una fuerza militar informal, siendo tan cruel como sus seguidores de origen rural. Aunque no necesariamente peyorativo, el término «caudillo» conlleva una idea de semi-barbarie derivada del célebre y polémico *Facundo* (1845), del argentino Domingo Faustino Sarmiento, obra que ha encontrado numerosos imitadores, tanto conscientes como inconscientes. Una justificación mucho más cuidadosamente elaborada de la persistencia de un determinado tipo de gobierno personal, basado en un consentimiento popular tácito, la constituye el *Cesarismo Democrático* (1928), del venezolano Laureano Vallenilla Lauz; el propio título ilustra ya cuál es su idea clave.

Tanto el historiador como el politólogo deben llegar a la conclusión de que el término no tiene nada de preciso, y ambos deberían tomarlo con reservas y utilizarlo con cautela. Si se examinan más de cerca las respectivas trayectorias de los «caudillos típicos», se comprobará que no poseen demasiadas características comunes. A Juan Manuel de Rosas (Argentina), José Antonio Páez (Venezuela) y Antonio López de Santa Anna (México) se les llama caudillos, pero los tres muestran diferencias sustanciales tanto en sus orígenes como en su forma de ejercer el poder. La base del poder de Rosas no fue nunca exclusivamente rural; y en relatos y memorias de sus contemporáneos, a quienes se solía denominar como caudillos era a sus subordinados del

interior, individuos de menor categoría cuyas ambiciones se limitaban especialmente a sus propias provincias. (Resulta significativo que, en Argentina, el término se utilice también para referirse a los que controlan los votos a nivel provincial o municipal, lo que les convierte en figuras relativamente menores). Al igual que Rosas, Páez había sido un destacado jinete durante su juventud, aunque más afeitado a la guerra y de extracción más humilde; sin embargo, su ascendencia en Venezuela se apoyó pronto sobre bases más urbanas e institucionales, y el respaldo de los llaneros, o habitantes de las llanuras centrales del país, se vio reemplazado por habilidades políticas más convencionales. El poder intermitente de Santa Anna no se basó en su control sobre cualquier parte o región del México rural, sino más bien en su papel como árbitro entre distintas facciones, regionales e instituciones, que incluían un ejército regular de dimensiones considerables.

La historiografía reciente ha comenzado a explorar con mayor profundidad y detalle los sistemas políticos de la América Latina posterior a la independencia. Los resultados muestran una amplia diversidad de temas políticos que reflejan la variada estructura social de la región y las diferentes circunstancias en las que se llegó a la independencia. En determinadas repúblicas no llegan a aparecer figuras fácilmente acoplables al modelo de caudillo. Entre ellas destacan Chile, con una política predominantemente civil, y Colombia, donde las frecuentes guerras civiles han producido aspirantes al papel de caudillo, pero ninguno lo suficientemente duradero como para poder enfrentarse a la hegemonía civil. Las referencias ocasionales a hombres como Diego Portales (Chile) o Rafael Núñez (Colombia) como «caudillos civiles» dan una idea de cuál fue su ascendencia, pero no sirven para analizarla o explicarla.

Durante los años posteriores a la independencia, el término ha sobrevivido no sólo en su acepción más humilde, la argentina, a la que nos hemos referido anteriormente, sino también como una cómoda etiqueta (frecuentemente periodística) para referirse a cualquier político destacado, tanto a nivel nacional como local. Pero la figura más relevante del mundo hispánico que ha utilizado formalmente el título durante el siglo XX no ha sido un latinoamericano sino Francisco Franco, quien, como lo recuerdan las monedas acuñadas durante su largo mandato, fue «Caudillo de España por la Gracia de Dios».

MD

Los militares en la política

En numerosos países latinoamericanos, los militares han llegado a considerarse a sí mismos como la clase dominante por naturaleza. Sin embargo, a mediados de la década de los ochenta existen considerables variaciones entre unos países y otros, y seis pautas o modelos perfectamente identificables de comportamiento militar en dicha zona. En Brasil y Uruguay (primer modelo) existe una coalición civil-militar considerablemente estable, siendo los militares el elemento dominante y controlando normalmente la presidencia. En Bolivia y Argentina (segundo modelo) los militares intervienen frecuentemente en la política; pero cuando llegan al gobierno, éste demuestra ser sumamente inestable; en 1966 y 1976 los militares argentinos intentaron aproximarse a un modelo más brasileño, pero no lo consiguieron en ninguno de los dos casos. En Bolivia, donde las intervenciones militares han sido frecuentes desde 1964, dicho modelo ha demostrado ser imposible de mantener en la práctica. El tercer modelo, el que se da en Chile, Panamá y Paraguay (y anteriormente en Nicaragua), está ejemplificado por el gobierno personalista de un dictador militar; el régimen depende en gran medida de la personalidad del dictador; pero, como demostró la España de Franco, este modelo puede ser bastante estable, al menos mientras el dictador siga vivo, aunque luego es muy probable que se planteen problemas sucesorios. El cuarto modelo (Perú y Ecuador) consiste en la alternancia entre gobiernos civiles y militares; los golpes de Estado dan paso a elecciones, que a su vez dan paso a nuevos golpes. Hasta hace poco tiempo este modelo era el más habitual en casi toda América Latina, pero últimamente ha dado paso en varios países a gobiernos militares a largo plazo. El quinto modelo, que se da en buena parte de América Central, equivale a una modalidad debilitada del cuarto, pero sin auténticas elecciones y con un gobierno militar basado menos en la institución militar y mucho más en el personalismo y el simple «gansterismo», con «escuadrones de la muerte» y similares. Existe finalmente un determinado número de países (México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, Cuba y Nicaragua) en el que siguen gobernando los civiles. Sin embargo, en la mayoría de estos países los militares siguen siendo una fuerza significativa que conserva privilegios institucionales, exige para sí una proporción importante del presupuesto nacional y actúa en muchos campos con independencia de la autoridad civil.

La preeminencia de los militares en la política puede explicarse en parte por la tradición histórica. Los ejércitos que

acabaron con el dominio colonial español a comienzos del siglo XIX se quedaron con frecuencia sin un papel claro en el nuevo orden político una vez alcanzada la independencia, pero con medios para exigir recursos y llamar la atención recurriendo a la fuerza. En Perú, que alcanzó finalmente la independencia en 1824, hubo que esperar hasta 1872 para que tomase el poder el primer presidente civil. Sin embargo, en otros países se ha mantenido la tradición del poder civil durante largos períodos de tiempo; a finales de la Segunda Guerra Mundial, Chile y Uruguay parecían contar con sistemas democráticos sumamente estables. Pero, aun así, las graves crisis sociales y políticas experimentadas por estos países durante la década de los setenta dieron lugar a intervenciones militares. Por tanto, las explicaciones históricas son valiosas, pero no deberíamos fiarnos exclusivamente de ellas.

A un nivel más general, la implicación de los militares en la política puede atribuirse a la ausencia relativa de guerras internacionales en América Latina. Antes de 1945 hubo muy pocas guerras, y con posterioridad ha habido únicamente pequeñas escaramuzas fronterizas; aunque no en todos los casos, estos conflictos han tendido a devolver el poder a los civiles. Los gobiernos militares no se muestran especialmente agresivos en términos de política exterior (siendo quizá la única excepción la ocupación argentina de las islas Malvinas en 1982), aunque es posible que en relación con las disputas fronterizas algunos gobiernos civiles se hayan visto obligados por temor a una reacción militar a adoptar posturas más firmes que las que habrían deseado.

Hasta hace poco tiempo, todos los países latinoamericanos han buscado fuentes de suministros de armas y de formación militar. Eso ha dado a la potencia suministradora —generalmente Estados Unidos— grandes oportunidades para influir en el comportamiento de los militares. En determinados momentos (por ejemplo, en Chile en el período comprendido entre 1970 y 1972), Estados Unidos ha intentado estimular la intervención militar en la política, mientras que en otros (por ejemplo, en Venezuela a partir de 1959) ha intentado desalentarla; no obstante, la influencia norteamericana rara vez es un factor decisivo, salvo en los pequeños países de América Central y del Caribe, donde continúa siendo preponderante. Como resultado de su colaboración militar con Estados Unidos, algunos grupos de oficiales del Ejército han llegado a tener puntos de vista fervientemente pronorteamericanos. El ejemplo más famoso lo constituye la toma de postura del llamado «grupo de la Sorbona» de oficiales brasileños. Esos oficiales combatieron junto a los Aliados en Italia durante la Segunda Gue-



Tanques en las calles de La Paz durante el golpe de estado del Coronel Natusch, 1979.

rra Mundial (siendo el único ejército de América Latina que participó), y pasaron luego a constituir el núcleo de la ESG (Escuela Superior de Guerra), centro de formación militar-civil fundado en 1949. Desde entonces, este grupo ha desempeñado un importante papel en la política brasileña, habiendo surgido recientemente de él tres presidentes (Castello Branco, Ernesto Geisel y João Figueiredo). Por otro lado, en determinados momentos, Estados Unidos ha perdido apoyo por intervenir demasiado de cerca en temas militares latinoamericanos. Tanto en Perú como en Bolivia, regímenes antinorteamericanos accedieron al poder poco después de que se diera un movimiento insurgente, debido en parte a que la CIA intervino directamente en ambos países pasando por alto la estructura y jerarquía militares, que se sintieron por tanto humilladas y ofendidas.

Más recientemente, los países latinoamericanos de mayores dimensiones, especialmente Brasil, se han convertido en importantes fabricantes de armas. Brasil es en este momento uno de los mayores exportadores de armamento de todo el mundo. A pesar de ello, los militares latinoamericanos no invierten en armas cantidades tan elevadas como sus equivalentes de Oriente Medio o África. Los desembolsos militares rara vez superan el 3 por ciento del PNB, aunque se observa una cierta tendencia al alza.

Los regímenes militares no se gastan necesariamente más en armas que los civiles; aunque, siguiendo el ejemplo de determinados presidentes civiles, algunos presidentes mili-

tares han intentado reforzar su posición política incrementando los gastos militares. Esto tiene algunos efectos beneficiosos a corto plazo, pero no debería exagerarse la importancia a largo plazo de los gastos militares con fines políticos.

Una buena base para comparar los diferentes tipos de régimen militar la constituye el nivel de institucionalización dentro de los propios militares; conviene resaltar que nos estamos refiriendo aquí sólo a la institución militar y no a la institucionalización del gobierno como tal. Los gobiernos militares «institucionales» se caracterizan por la imposibilidad de distinguir entre los rangos militares y los cargos políticos, la existencia de una ideología militar oficial o semiformal que sirve para legitimar el dominio militar, y relaciones relativamente estables entre los militares en el gobierno y determinados intereses civiles, incluyendo los tecnócratas económicos, el sector comercial y la Iglesia. Aunque no forma parte de la definición, todo esto implica que los gobiernos militares institucionales pueden mantenerse en el poder a pesar de su considerable grado de impopularidad, que son sumamente eficaces en la represión de sus oponentes de izquierda o sindicales y que, al menos a largo plazo, son capaces de controlar a las organizaciones terroristas de extrema derecha.

A modo de contraste, los gobiernos militares personalistas tienden a caracterizarse por el escaso grado de identificación entre los rangos militares y los cargos políticos. El

golpe militar original fue en ocasiones encabezado por un oficial del Ejército relativamente joven (aunque se llamase a sí mismo coronel) y se ascendiese posteriormente a general), o, a modo de alternativa, por un oficial de mayor edad que fue eliminando gradualmente de la escena a sus diversos rivales. Existen muchas probabilidades de que en el gobierno haya civiles, procedentes de una gama más o menos amplia de grupos de intereses. También es probable que el régimen intente legitimarse mediante elecciones controladas o un plebiscito amañado, y en consecuencia, que siguiera obligado a intentar alcanzar un cierto grado de popularidad, ya que una farsa electoral descarada podría resultar políticamente perjudicial. La popularidad no tiene por qué equivaler a un apoyo mayoritario, pero regímenes personalistas impopulares pueden resultar vulnerables al descontento de la clase media expresado a través de editoriales periodísticos o manifestaciones de estudiantes (como ocurrió en el caso de Pérez Jiménez en Venezuela en 1957-58 y en el de Odría en Perú en 1956). De manera consciente, los regímenes personalistas intentarán presentarse como «menos militares» que institucionales; con frecuencia el presidente vestirá no de uniforme sino de civil.

Hasta 1960, aproximadamente, casi todos los regímenes militares de América Latina eran de tipo personalista. Tenían la ventaja de permitir una estrecha comunicación entre las élites militar y civil, pero no siempre eran considerados satisfactorios por los propios militares. Por un lado, si el presidente militar actuaba de manera impopular, se verían implicados todos los militares sin poder influir de ninguna manera en el resultado. Por esta razón, los oficiales del Ejército se negaban en determinados momentos a defender a un presidente militar contra manifestaciones populares y le dejaban abandonado a su suerte. En segundo lugar, la existencia de un caudillo militar facilitaba a los oponentes revolucionarios del régimen convertir la oposición al dictador en oposición al sistema político en su conjunto. El derrocamiento del general Batista por Fidel Castro en Cuba durante el período 1956-59 convenció a numerosos oficiales del Ejército de que se necesitaba una política más flexible. En tercer lugar, a medida que la institución militar fue aumentando de dimensiones y las armas se fueron haciendo más perfeccionadas, en los países latinoamericanos de mayores dimensiones fue resultando cada vez más difícil que un solo individuo o un pequeño grupo de oficiales alcanzase una preeminencia personal absoluta mediante un golpe militar dado en el momento oportuno; los sucesivos golpes necesitaban implicar cada vez a un mayor número de personas, planificarse más cuidadosamente y estar más seguros de su ejecución. Esa fue la lec-

ción extraída por los conspiradores militares de Brasil, que fracasaron en 1961 pero triunfaron en 1964. En consecuencia, los golpes empezaron a estar encabezados por comandantes en jefe del Ejército en lugar de por coronales rebeldes. Una vez en el poder, estos comandantes en jefe intentaron lógicamente reforzar su posición conservando el control sobre los puntos claves del poder en la institución militar. Finalmente, expertos en contrainsurgencia, incluyendo el gobierno de Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que un gobierno militar institucionalizado resultaría más eficaz contra los revolucionarios que otro personalista, ya que les sería más difícil enfrentar a unos oficiales con otros y dividir por tanto al Ejército.

El primer régimen militar institucionalizado de toda América Latina tomó primeramente el poder en Perú (1962-63). Sería seguido por los regímenes militares de Brasil (1964-), Argentina (1966-73 y también 1976-83), Perú (1968-80), Ecuador (1972-79) y Uruguay (1973-). La estructura institucional fue similar en todos los casos. Una figura militar destacada (con frecuencia el comandante en jefe del Ejército) se vio convertido en presidente y apoyado por una junta integrada por oficiales del Ejército de alta graduación. Aunque no en todos, en la mayoría de los casos la junta se vio incorporada directamente al gobierno a través de los ministerios del Ejército, Marina y Aviación. Normalmente, aunque no siempre, los puestos económicos clave de ministro de Hacienda y director del Banco Nacional fueron ejercidos por tecnócratas civiles. No obstante, y en todo momento, el liderazgo militar prestaba atención a los deseos e inquietudes del cuerpo de oficiales en su conjunto y trazaba las directrices generales de la política que debían seguir los tecnócratas civiles. Los militares conservaban también el control institucional efectivo, sobre todo en una serie de materias. Por ejemplo, la Seguridad y la Inteligencia siguieron exclusivamente en manos militares. Más adelante, y concretamente en Brasil y Argentina, se fijó la duración del mandato presidencial.

Uno de los factores clave de esta transformación fue la creación de una ideología militar propia a través de las academias militares para la formación de oficiales. Dado que los militares latinoamericanos habían tenido muy pocas oportunidades de combate armado prolongado, y que los golpes de Estado oportunistas resultan actualmente más difíciles de llevar a cabo que en tiempos anteriores, el factor más importante para determinar la superioridad militar ha sido el grado de formación recibido. Evidentemente, las evaluaciones militares sobre educación ponen más el acento en la disciplina que en el pensamiento creativo. No obstante, sigue siendo cierto que se concede más importancia a la edu-

cación. En primer lugar, la confianza en uno mismo que aporta la educación ha sido ciertamente un componente clave para el mantenimiento de largos períodos de gobierno militar y ha reducido el grado de influencia civil sobre la visión de los militares. Un observador ha señalado que en el Perú de los años treinta un general temblaba cuando se encontraba con un embajador; ahora es más probable que ocurra exactamente al revés. Además, al menos en las academias para la formación de oficiales, la educación sobre temas puramente militares se ha visto complementada con la educación sobre cuestiones económicas y sociales. La ESG brasileña, fundada en 1949, y el CAEM peruano (Centro de Altos Estudios Militares), fundado en 1950, fueron pioneros a este respecto. Lo que se creó con estas instituciones, y luego se difundió por toda América Latina, fue una ideología de gobierno militar. Se decía que, en la era poscolonial, el comunismo tenía más probabilidad de amenazar a un país mediante la subversión que por medio de una invasión. Para derrotar la subversión (y en general para librar con éxito cualquier guerra convencional), hacía falta que los militares se organizaran sistemáticamente y desempeñasen dentro de la sociedad civil un papel más importante que antes. La subversión podía también debilitarse mediante la aplicación de algún tipo de reforma social (como se enseñaba en el CAEM), o también mediante un período de rápido crecimiento económico que transformase un país débil y subdesarrollado en desarrollado (la perspectiva de la ESG). Mientras tanto era imprescindible mantener un férreo control político. En cualquier caso, los militares trazaron un plan de acción que exigía un largo período de gobierno militar y con toda certeza contribuiría a reforzar el atractivo ideológico de la autoridad militar existente. «Nuestro deber como gobernantes», dijo en cierta ocasión a sus hombres el general (y presidente) Velasco de Perú, «es inseparable de nuestro deber como oficiales del Ejército».

Los diversos factores institucionales que hemos tomado en consideración parecen indicar que los militares latinoamericanos rara vez suelen considerarse como representantes de una clase o grupo social concreto. De hecho, los oficiales del Ejército suelen proceder de la clase media baja. Dado que la educación secundaria constituye normalmente un requisito previo para la admisión en las academias militares, la clase más baja queda generalmente excluida. Los hijos de la clase media alta optan en la mayoría de los casos por hacer carrera en ocupaciones que exijan menos esfuerzo y disciplina y también mejor pagadas, especialmente en empresas privadas o bancos. El origen social rara vez determina de inaneza decisiva el comportamiento militar;

ya que, hablando desde un punto de vista social, los oficiales que se abren camino en el Ejército ascienden en la escala social; de hecho, uno de los más claros motivos de orgullo de los militares latinoamericanos es que el Ejército facilita esta movilidad. Además, la conciencia de llevar una vida disciplinada, y en ocasiones dura, juega un gran papel en la creación de una conciencia militar aparte y contribuye a generar un cierto desprecio por lo que (con frecuencia justificadamente) se considera como la vida cómoda y sin complicaciones de la clase media alta y la clase alta. Finalmente, el elemento hereditario se está convirtiendo en un factor cada vez más importante dentro de los Ejércitos latinoamericanos. Una elevada proporción de oficiales del Ejército envían a sus hijos a academias militares, donde con frecuencia se les enseña a tener ambiciones no sólo puramente militares sino también políticas.

En consecuencia, si se desea comprender cuál es el comportamiento de los militares en la política, lo mejor es estudiar directamente cómo perciben sus intereses institucionales. Uno de sus rasgos característicos es la hostilidad hacia la movilización popular excesiva (condenada con frecuencia como muestra de «indisciplina social»). Los regímenes militares son enemigos declarados de los movimientos insurgentes de inspiración marxista y los han destruido en toda América del Sur de manera implacable; parece ser que, en 1974, en plena lucha contra el MIR (grupo revolucionario de extrema izquierda), el presidente chileno Pinochet le confesó a un periodista: «claro que torturamos a la gente; necesitamos la información».

Los revolucionarios han tenido cierto éxito en su lucha contra gobernantes personalistas tales como Batista en Cuba y Somoza en Nicaragua, pero ninguno en su lucha contra gobernantes institucionales. Los gobiernos militares tienden también a contemplar con desconfianza a los sindicatos y los periódicos críticos, pero por lo general no han recurrido a su prohibición total. Han preferido tolerar una actividad de oposición limitada sobre una base discrecional, aplastando a sus oponentes sólo cuando éstos van demasiado lejos. Algunos gobiernos militares, especialmente el régimen de Velasco Alvarado en Perú (1968-75), han dado soporte a la movilización popular limitada, siempre que se mantuviera dentro de las fronteras trazadas por el propio gobierno. Sin embargo, a este mismo gobierno le resultó cada vez más difícil encauzar las demandas populares de manera tolerable, y terminó aplastando su propia creación. En general, los gobiernos militares reaccionan en contra de las organizaciones populares fuertes, pero suelen intentar cooperar y favorecer a las más débiles con la esperanza de llegar a controlarlas para sus propios objetivos.

Resulta mucho menos fácil generalizar acerca de las políticas económicas seguidas por los gobiernos militares. Los militares en Brasil (1964), Chile (1973) y Argentina (1976) tomaron el poder durante graves crisis económicas, con una inflación del 100 por cien anual o más y una disminución del crecimiento económico. Los tres gobiernos respondieron con un plan de estabilización clásico, inspirado por el Fondo Monetario Internacional, que aumentó el paro pero que también redujo el nivel de inflación; los tres avanzaron también hasta cierto punto en el desmantelamiento de una estructura arancelaria de carácter marcadamente protector. No obstante, resulta difícil decir qué otra cosa podían haber hecho en esas circunstancias. Los militares peruanos, que se encontraron con una situación enormemente difícil cuando tomaron el poder en 1968, aplicaron al principio una política fiscal levemente expansionista seguida por otra muy expansionista, que condujo a la crisis de 1976-78. A largo plazo existen algunas diferencias notables entre los distintos gobiernos militares. En el Chile posterior a 1973, el régimen de Pinochet (que comenzó «institucionalmente» pero adoptó luego un carácter más «personalista») aplicó firmemente una política económica inspirada en las teorías de la «escuela de Chicago», es decir, una política clásica de libre mercado, e intentó crear no sólo una economía de mercado sino también una sociedad de mercado. En Brasil, por el contrario, el objetivo del régimen militar ha sido el de desarrollar una especie de capitalismo de Estado, desempeñando las principales empresas públicas un papel clave en la formación de capital. En general, los militares latinoamericanos suelen mostrar una cierta preferencia por la industria estatal (salvo en el caso chileno y, en menor medida, en el argentino) y por el desarrollo de la industria pesada bajo un férreo control nacional por razones de seguridad; pero esta preferencia se ve en ocasiones relegada a un segundo lugar, ocupando el primero las directrices y consejos de los tecnócratas civiles. El gobierno militar peruano emprendió algunas reformas sociales, sobre todo una reforma agraria, pero pocos regímenes militares se han mostrado interesados por una redistribución de los ingresos a gran escala (aunque es de justicia señalar que lo mismo ha hecho la mayoría de los gobiernos civiles).

Los gobiernos militares son por lo general duraderos pero no inmortales. Hasta hace poco tiempo se daba por sentado que, al cabo de unos cuantos años de gobierno, los militares volvían directamente a sus cuarteles y convocaban elecciones o bien intentaban convertirse en un gobierno civil por medio de unos comicios. Un nuevo rasgo de los gobiernos militares consiste en su longevidad. Los mili-

tares peruanos que se hicieron con el poder en 1968 no se lo han devuelto a los civiles hasta 1980, mientras que los militares ecuatorianos lo hicieron al cabo de siete años de gobierno (1972-79). El general Pinochet, que se apoderó del poder en Chile en 1973, ha afirmado que lo mantendrá al menos hasta 1989. Los militares argentinos han devuelto el poder a un gobierno civil libremente elegido en 1983, tras su desastrosa guerra de las Malvinas. En Brasil, los generales permitieron en 1982 la celebración de elecciones directas para nombrar gobernadores de estado por primera vez desde 1965, y prometieron elecciones presidenciales indirectas para finales de 1984. También en Uruguay prometieron los militares el retorno de la democracia en 1984, once años después de la toma del poder.

Un factor que en épocas anteriores favoreció la vuelta de los militares a los cuarteles fue la idea bastante extendida de que lo «normal» era que gobernaran los civiles, mientras que el gobierno de los militares era una aberración, aunque bastante frecuente. La situación cambió durante la década de los setenta, cuando los gobiernos militares de todo el continente dejaron bien claro que, en caso necesario, se planteaban permanecer en el poder durante largos periodos de tiempo. La desunión entre los oficiales del Ejército o el fracaso económico pueden todavía minar regímenes militares concretos, pero éste es un problema que se puede resolver simplemente mediante cambios en el seno del propio Ejército. Sea cual sea la evolución de la situación a corto plazo, pocos observadores ponen en duda que los militares continuarán constituyendo una fuerza poderosa en la política latinoamericana.

GP

Estructura social y cambios sociales en América Latina

Introducción

Resulta peligroso generalizar acerca de la estructura social latinoamericana. Las razones son importantes. En primer lugar, aunque toda la región posee una identidad cultural común, derivada de la colonización española y portuguesa, algunos países muestran más cualidades «latinas» que otros. Los países del llamado Cono Sur (Argentina, Uruguay y, en menor medida, Chile) son los que cuentan con las poblaciones más europeas, compuestas en gran parte por

descendientes de inmigrantes europeos. Otros países, como los de la zona andina y buena parte de América Central, cuentan con poblaciones fundamentalmente indígenas, o de ascendencia mestiza. En el Caribe y Brasil la población negra es más numerosa y, desde un punto de vista cultural, ejerce una mayor influencia.

En segundo lugar, los países latinoamericanos difieren mucho en cuanto a su grado de desarrollo económico. Esta variación contribuye a explicar no sólo la proporción de habitantes que viven en áreas rurales y urbanas, sino también los tipos de trabajo y formas de vida que muestran los diferentes grupos sociales en ambos entornos. De todos los países latinoamericanos, sólo Cuba cuenta con un régimen socialista, aunque el gobierno sandinista establecido en Nicaragua en 1979 parece estar desplazándose cada vez más hacia la izquierda. A diferencia de lo que ocurre en otras regiones del Tercer Mundo, en América Latina las aspiraciones socialistas las expresan fundamentalmente los grupos de oposición.

Algunos países, como Argentina y Brasil, cuentan con sectores industriales de larga tradición y por tanto con una clase media relativamente numerosa y con una clase obrera industrial. Otros países han experimentado un proceso de industrialización más reciente; fundamentalmente desde 1940 en el caso de México, o desde 1970 en el caso de algunas regiones de los Andes y América Central. En esos casos el mercado interno es menor y la población de la que se compone dicho «mercado» ha adquirido valores de clase media u obrera en el transcurso de las dos últimas décadas. Es importante reconocer este hecho cuando estudiamos América Latina desde una perspectiva europea occidental o norteamericana.

En tercer lugar, y debido a que el desarrollo económico de América Latina difiere de los países ya industrializados, la estructura social muestra contradicciones aparentes que resultan desconcertantes para la mayoría de los observadores de fuera de dicha región. Las formas de vida tradicionales coexisten con el mundo «moderno» hasta unos extremos que no se dan en América del Norte, y rara vez incluso en Europa. La pobreza y la riqueza coexisten difícilmente. Las calles de las ciudades están llenas de burros y mendigos, al tiempo que de «Cadillacs» y «Volkswagens». Los modernos grandes almacenes, que forman en ocasiones parte de una gran cadena multinacional, comparten el espacio urbano con miles y miles de vendedores callejeros que forman parte de lo que los economistas denominan el «sector urbano informal» (lo que quiere decir que no aparecen en las estadísticas oficiales). Incluso en el campo es poco probable que los labradores se atengan a un modelo tradicio-

nal de agricultura, y con frecuencia se mezclan empresarios agrícolas que emplean la tecnología agrícola más moderna, cooperativas de comercialización y técnicos del gobierno. La coexistencia de una estructura de sociedad moderna con sus clases capitalistas y de una sociedad «precapitalista» integrada por terratenientes y campesinos debería servir para recordarnos que la primera depende de la segunda, mientras que la existencia de un sector moderno no implica en absoluto que la transición hacia una sociedad industrial capitalista se completará siguiendo los pasos del modelo europeo.

Finalmente, conviene poner de relieve que muchos elementos importantes de la estructura social latinoamericana no resultan evidentes a primera vista, y que tampoco quedan fácilmente registrados en la obra de científicos sociales o en las estadísticas. Algunos grupos, especialmente las mujeres y los niños, resultan mucho más «invisibles» a los gobiernos y expertos oficiales de lo que deberían ser. Al igual que ocurre con buena parte de la población indígena y negra, su estatus es de carácter subordinado y apenas se presta atención a lo que puedan sentir o pensar.

Urbanización

América Latina es el más urbanizado de los continentes del Tercer Mundo. Incluso hace dos décadas, países como Chile, Argentina y Venezuela eran más «urbanos» que «rurales». La imagen que da hoy en día América Latina es la de un continente en el que la mayoría de la población vive en grandes urbes y ciudades (véase tabla 1). Incluso las áreas menos desarrolladas, como América Central, muestran esa misma tendencia hacia la urbanización. Datos extraídos del censo de 1970 indican que, en la mayor parte de América Central, una región que produce cultivos de exportación tales como plátanos y café y que depende fuertemente de la importación de productos manufacturados, la

Tabla 1. Porcentaje de la población urbana con respecto a la población total.

	1960	1980
Argentina	74	82
Brasil	46	65
Chile	68	81
Ecuador	34	45
México	51	67

Fuente: International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) *World Development Report, 1980* (Washington, DC, 1980).